

60

LETRAS LIBRES
AGOSTO 2019

Paisajes de la angustia argentina

TEXTO Y FOTOGRAFÍA

IGNACIO CONESE

—¿Sabés qué temperatura hace acá en invierno? Quince, veinte grados bajo cero todas las noches. ¿Cómo va a aumentar el gas? ¿Cómo va a aumentar tanto?

Quien pregunta es Juan Luzcubir, que tiene 67 años y junto con su esposa Feliciano Mercado, de la misma edad, administra el hotel Cesarito, ubicado en Abra Pampa, un pueblo de quince mil habitantes cerca de la frontera con Bolivia, a más de tres mil metros de altura, y con un 60% de la población debajo de la línea de pobreza. A últimas fechas el gas se encareció tanto como en la ciudad de Buenos Aires, que tiene el PIB de Bélgica: alrededor de un 800% de aumento desde que Mauricio Macri subió al poder.

—Quería escribirle una carta al presidente, porque parece que no entienden cómo es la vida fuera

de la General Paz. Que el gas acá no es un lujo, es una necesidad. Pero qué le voy a escribir, como si me fuera a escuchar.

En otra punta del pueblo, Juan tiene un complejo de habitaciones, a las cuales les falta el cielo raso, revoque y algunos detalles más para terminarse.

—Así como lo ves quedó desde el 2015. Desde entonces no lo pude terminar, por falta de presupuesto, y falta de clientes, no hay más plata en la calle. Crecer, progresar, eso ya se terminó.

Juan es uno de esos “hombres que se han hecho a sí mismos”, a quienes el gobierno meritocrático de Macri y la alianza gobernante de Cambiemos dirigen siempre su mensaje: conservador, trabajador, honesto, que no se preocupa por qué haga el Estado, mientras lo deje trabajar en paz. Sin embargo, su interés por el gobierno se ha intensificado a últimas fechas: la deuda argentina contraída bajo la actual administración es ya escandalosa por donde se la mire, y solo empeora.

—Yo lo voté. Quería un cambio. Llevaban muchos años los otros en el gobierno, muchas cagadas. Pero

a estos tipos parece que no se les da. Hicieron mierda el país en un rato y, lo peor, lo endeudaron, están cargándose el futuro.

El último de los bonos bomberos que emitió el Estado, las Leliqs –las Letras de Liquidez del Banco Central–, unos bonos en pesos de vencimiento diario, cuestan por día más de 1.600 millones de pesos solo en pago de intereses. El costo de los intereses de solo ese bono es más alto que todos los recortes ministeriales juntos acordados en el presupuesto de 2019.



La coalición de derecha –que desde 2015 lidera el empresario y durante dos periodos (2007-2011 y 2011-2015) jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri– asumió un país complicado. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner incluso así lo advirtió cuando dijo que no iba a dejar un país fácil de gobernar. Para ella, cualquier gobierno que quisiera dar marcha atrás al progresismo que había alcanzado el país se las vería en serias dificultades, dada la cantidad de derechos sociales que se habían ampliado durante la administración de los Kirchner. Macri, en cambio, estaba teniendo problemas con mantener su narrativa de “la pesada herencia”, una estrategia de comunicación que, en cada intervención pública, buscaba poner en tela de juicio los avances de la última década: para el nuevo gobierno o se trataba de una mentira o el costo había sido dejar en quiebra al Estado.

En 2015, Macri recibió un país con una inflación muy alta, alrededor de 38%. El valor del peso respecto al dólar se mantuvo relativamente estable durante la gestión anterior, con base en muchas leyes regulatorias e intervenciones constantes en el mercado. En su segundo día de mandato, Macri levantó todas estas restricciones y el peso terminó devaluándose un 40% en una sola jornada. Cada dólar americano cotizaba entonces cerca de 13 pesos. Al cierre de esta nota cada dólar cotiza 44 pesos. Hay que remontarse al año 1989 para encontrar un rendimiento semejante. La mayor parte de las devaluaciones ocurrieron el año pasado. Mientras que la mayor caída durante la anterior gestión había sido de 9,5%, hoy en la Argentina de Macri es casi común que la moneda varíe un 7% un día cualquiera. De hecho, con beneplácito del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno no puede intervenir en el mercado cambiario si el valor del dólar está entre 38 y 50 pesos, una variación extrema para cualquier escuela económica.

Durante su campaña, Macri habló de una “lluvia de inversores” y una “lluvia de dólares” que, con la salida del populismo, su gobierno iba a regar por todo el

país. El actual presidente solo pudo encontrar apoyo en Trump y en la directora del FMI Christine Lagarde. Un apoyo de 57.000 millones de dólares hasta abril de 2019, el mayor en la historia del organismo financiero y del país. En 2015 la deuda pública representaba un 27,3% del PIB. Con los últimos desembolsos del FMI, la deuda pública ya supera el 100% del PIB.

Argentina es hoy el país más endeudado de América Latina, con el agravante de que es el que a menor plazo tiene colocada su deuda, con la mayoría de los vencimientos en los próximos diez años.



Hugo Albado arrancó fabricando calzado en la década de los setenta del siglo pasado. Creció en los ochenta, casi se funde durante los noventa, se volvió a recuperar y a crecer durante los comienzos de este siglo y ahora se encuentra nuevamente cerca de quebrar, en modo superviviente. El empresario de 64 años es además el vicepresidente de la cámara que agrupa a los fabricantes del rubro en la provincia de Córdoba.

Su planta cuenta con la capacidad de fabricar ochocientos pares por día, para lo cual emplearía directamente a unas cien personas e, indirectamente, a casi otro centenar. Al cierre de esta nota quedaban cuatro empleados en la fábrica, que tampoco tienen por seguro conservar sus puestos. A principios de este año eran quince; a principios de la gestión de Macri, treinta.

Durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández se acumularon en puertos argentinos cientos de miles de pares de zapatos y zapatillas importados que, debido a políticas proteccionistas, no dejaban entrar o demoraban eternamente su entrada al país. En el gobierno de Macri estas restricciones e impedimentos se levantaron al mismo tiempo y cientos de miles de pares inundaron el mercado a precios de saldo. Fue el primer golpe duro que recibieron los fabricantes, que de un día para el otro vieron cómo sus ventas se achicaban radicalmente. Este año, la inflación del 50% y la devaluación del peso frente al dólar de más de 100% continuaron haciendo estragos. En Córdoba un 10% de los fabricantes ha cerrado sus puertas y, de acuerdo a la cámara del sector, casi todas las demás empresas se encuentran en crisis.

–En una reunión entre la cámara y la nación nos sugirieron que nos convirtiéramos en importadores. Que nos salvásemos los empresarios. Uno es fabricante, yo quiero producir y dar trabajo, no importar. Después nos sugirieron, en otra ocasión, que hiciéramos cerveza artesanal, ¡en una reunión con la Cámara de la Industria del Calzado!, por más insólito que suene.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalla que, desde 2016 hasta finales de 2018, alrededor de 246 empresas entraron en un

proceso preventivo de crisis, 805 lo hicieron en un concurso preventivo de acreedores y 2.177 se declararon en quiebra. Solo el año pasado hubo más de cien mil despidos en el sector privado. Y el problema no distingue empresas grandes de pequeñas.

Para salir de la recesión, Argentina necesitaría duplicar su PIB actual, en un momento en que el 60% de la capacidad industrial del país se encuentra ociosa.

Ezequiel González tiene 32 años y supo desde muy chico que lo suyo eran los “bichos”. Después de terminar la secundaria en su natal Esquel, en la Patagonia, se instaló en la ciudad de Córdoba, donde estudió en la Universidad Nacional y se recibió de biólogo, con el promedio más alto de su generación. Después completó su doctorado en la misma casa de estudios, gracias a una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el principal organismo científico del Estado argentino. En 2018 se postuló para un puesto como investigador en dicho consejo, pero los recortes presupuestales le negaron esa oportunidad a pesar de sus más que suficientes méritos académicos.

—Comparado a años anteriores, con el currículum que presenté habría quedado tranquilamente, pero con los recortes de este año, del 40%, las cosas se hicieron mucho más duras. Cuando pasó esto, me presenté a todo lo que pude y, a través de un colega italiano, me enteré de un puesto de investigador en mi área en una universidad en Praga y me puse en contacto; al poco tiempo me notificaron que había quedado. En abril ya me había mudado.

El doctor González investiga los insectos que habitan los ambientes circundantes a los cultivos. Estudia no solo qué beneficios obtienen los insectos sino cómo se puede sacar provecho de ese conocimiento.

El control biológico de los ambientes puede sustituir la fumigación excesiva, una práctica que en Argentina está relacionada con la aparición de plagas y malezas resistentes en los campos agrícolas. Constituye, así, un área de estudio clave para un país donde la aplicación de agroquímicos crece un 10% anual.

A mediados de este año el doctor González dejará su puesto en la Universidad Checa de Ciencias de la Vida, en Praga, para integrarse como investigador en la Universidad de Koblenz-Landau en Alemania, gracias a una beca posdoctoral de la Fundación Humboldt. En este nuevo viaje lo acompañarán su esposa embarazada y su hija de tres años.

—Yo tengo suerte, porque puedo seguir investigando y mi familia me acompaña. Otros colegas no tienen la misma posibilidad. Para muchas áreas, como la ecología, el Conicet es, o era, la única posibilidad. Mucha de esta gente que tenía los méritos para un puesto finalmente desiste y esas líneas de investigación se pierden.

Este año el doctor González se enteró de que finalmente el Estado le había otorgado el puesto; pero era tarde, se encontraba ya lejos de Argentina.

El trámite para alcanzar alguno de estos cargos dura casi dos años. Al doctor González, como a la mayoría de los científicos que se encuentran en el extranjero, le gustaría volver; poder devolverle a un sistema que tanto le ha brindado. Son muy pocos los países del mundo, como Argentina, donde una persona puede doctorarse, con buen nivel de educación, prácticamente gratis.

—Hay que ver qué pasa en dos años. Cómo están las cosas. En Argentina sabemos que dos años puede ser muchísimo tiempo. La intención es volver, pero es Argentina. No se sabe.

Durante la campaña presidencial, el único mérito que Macri reconoció a la gestión de Cristina Fernández fue su política en ciencia y tecnología: la repatriación de investigadores, el crecimiento permanente en el número de investigadores y el aumento en el presupuesto para investigación. Ya al mando, mantuvo al ministro de Ciencia del gobierno anterior en señal de reconocimiento y continuidad. Sin embargo, la continuidad quedó solo en eso: en repetir el nombre de un ministro, que dejó incluso de tener ese cargo, después de que la instancia fuera devaluada de ministerio a secretaría (algo que Macri también hizo con los ministerios de Salud y de Trabajo, entre otros). Eso sin contar el abrumador recorte presupuestario.

En 2015 el Conicet acogió a cerca de mil nuevos investigadores; en 2018 solo pudo darles lugar a 450. Esa disminución ha venido de la mano de la reducción monetaria. Diversos institutos de investigación no cuentan con el suficiente dinero para encarar sus facturas de electricidad. Más de la mitad de los 290 directores de centros del Conicet declararon situaciones similares de falta de financiación, algunas más severas que otras.

Se desconoce el número de científicos que han salido del país desde que Macri asumió la presidencia, pero, de acuerdo con muchos investigadores, podría tratarse de uno de los éxodos más grandes que se han registrado, incluso superior al acontecido durante las dictaduras militares del siglo pasado.

Aunque lo ha intentado, el gobierno de Mauricio Macri no ha sabido dismantlar la estructura de Estado creada por el kirchnerismo: han sobrevivido el sistema de pensiones, los derechos laborales y la asistencia social que impulsó el anterior gobierno. De hecho, en muchos casos su apuesta ha sido pragmática: se ha valido de más de una de esas estructuras para apagar incendios y evitar grandes conflictos o estallidos sociales. Han intentado aplicar controles de precios, aumentos en las retenciones a las exportaciones agrícolas y han hecho asignaciones a

programas de asistencia social. Es, por decirlo pronto, kirchnerismo puro, pero sin el convencimiento que tenían los kirchneristas para implementarlo.



La Escuela Especial Profesor Luis Morzone de la localidad de Unquillo es la principal herramienta pública para la educación e integración social de un centenar de niños discapacitados en un rango etario que va desde recién nacidos a adultos de veinte años. Su primer edificio fue un hotel antiguo reconvertido y destruido. Cuando el pozo negro se hundió, a mitad de ceremonia de inicio de las clases, la provincia les prometió un recinto nuevo; mientras tanto los reubicó en el antiguo edificio de una escuela normal que había cambiado de sede. Corría el año 2005.

La medida sería temporal, por uno o dos años, hasta que el edificio prometido, adaptado a las necesidades de una escuela para alumnos con discapacidades, estuviera listo. La provincia no hizo nada y dos años después la nación se hizo cargo de la promesa: en 2007 dio por iniciada la construcción. Tiempo después la empresa constructora abandonó el proyecto por falta de pagos. Se tuvo que licitar de nuevo.

Durante la nueva etapa el proyecto avanzó, pero fue detenido otra vez por una palmera añeja que se tenía que retirar de acuerdo con los planos. El intendente de la localidad se opuso al retiro de la palmera, argumentando que era “patrimonio de la humanidad”. Así lo relata Marcela Prados, la directora de la escuela, que lleva 26 de sus 48 años trabajando en la institución. El intendente logró su cometido y la obra se suspendió. Se rehicieron los planos y el diseño, bajo supervisión de la numerosa burocracia involucrada. Pasó más de un año y la constructora abandonó la obra. Se hizo otra licitación.

—No hay un lugar digno para cambiar a un chico. Con un niño pequeño es una cosa, pero con los chicos más grandes es distinto, a vos no te gustaría que te estén cambiando en un salón donde hay gente entrando y saliendo, es una cuestión de dignidad.

El edificio actual es una vieja casona modificada, con un pequeño patio de tierra, sin césped, con solo un árbol. Para ir de cualquier lado a otro hay que salir a la intemperie. La mitad de las aulas, que en su mayoría cumplen dos o tres funciones simultáneas, no tiene cielo raso. El comedor no cuenta con ventanas ni ventilación adecuada. La cocina no debería estar habilitada. Las instalaciones de gas y eléctricas son un desastre.

—Nosotros hacemos de todo. Nos recreamos en la precariedad para crear todos los días estrategias para estar mejor, pero la realidad es que no estamos para nada bien.

La tercera constructora tomó el proyecto y avanzó de manera notable; sin embargo, por falta de pagos,

abandonó también la obra. Desde hace más de dos años la construcción se encuentra parada. Se quedó con un avance del 80%. Algo “espectacular”, en palabras de la directora, si es que algún día se termina.

Este año, el pozo negro se hundió de nuevo. Los padres decidieron tomar el edificio, arreglarlo como pudiesen e impedir el inicio de las clases hasta que alguna autoridad apareciera a dar la cara.

—Se supone que tenemos un gobierno que nos representa. Es mucha impotencia. En el gobierno no han de saber ni dónde estamos ubicados en el mapa. Qué les importan cien chicos discapacitados del interior.

No les importan. La administración de Cambiemos ha quitado 170.000 pensiones de discapacidad. A simple sablazo y con flacas razones. En enero de este año se eliminó a los menores de edad con discapacidad como beneficiarios y se modificaron los requisitos de solicitud de pensiones. La Agencia Nacional de Discapacidad aseguró que “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones” pero, mientras tanto, a los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones. El argumento es que “no tienen incapacidad laboral”. Pensaban quitar 20.000 pensiones asignadas pero el recorte quedó en pausa ante los desesperados reclamos de los familiares.



A comienzos de este año el panorama electoral argentino parecía más o menos definido: por un lado estaría Mauricio Macri buscando su reelección, por el otro Cristina Fernández; y habría una tercera vía —la que el politólogo Jorge Asís denominó el “peronismo perdonable”: un conjunto de legisladores de alto perfil y gobernadores que se habían alejado del kirchnerismo cuando aún era gobierno—, de la cual probablemente saldría otro candidato. Todo indicaba que iba a ser inevitable una segunda ronda entre los dos candidatos más votados que no hubieran llegado al 50% de los votos o a una diferencia mayor a diez puntos. Macri y Cristina eran quienes tenían mayor posibilidad.

Ese escenario era el ideal para los planes oficialistas ya que les permitía antagonizar con la expresidenta mientras las facciones peronistas se devoraban, como ocurrió en las últimas tres elecciones nacionales, en las que Cambiemos triunfó. Pero en mayo, un mes antes del cierre de listas, un terremoto en forma de video en redes sociales sacudió el escenario político y dejó al universo de encuestadores, politólogos, periodistas, opinadores y expertos en *marketing* completamente fuera de juego: en poco más de doce minutos Cristina Fernández se bajó un peldaño en la candidatura y anunció como candidato de su fuerza a Alberto Fernández. Fue la primera vez en la historia argentina que un candidato a vicepresidente anuncia al candidato a presidente.

Alberto Fernández había sido jefe de Gabinete de Ministros durante la presidencia de Néstor Kirchner y durante el tramo inicial de la primera presidencia de Cristina Fernández. Había sido, para decirlo pronto, la mano derecha de ambos mandatarios. Después de su renuncia se volvió una figura de oposición durante la segunda presidencia de Cristina, al lado de otros exministros kirchneristas. En más de una ocasión, calificó las gestiones de aquella segunda presidencia como “deplorables”.

La designación del binomio Fernández-Fernández operó como un gran imán peronista y achicó de manera drástica la avenida del medio que pretendían ocupar los peronistas críticos de la expresidenta. De ese modo, con una fórmula “antigrieta” –con la que se busca hacer frente al escenario de división social que se vive en Argentina–, la unificación del peronismo se ha dado casi de manera completa a nivel nacional. El peor escenario para el oficialismo.

La respuesta del macrismo ha sido designar al senador Miguel Pichetto como compañero de fórmula de Macri. Pichetto, quien durante dieciocho años fue jefe de la bancada peronista-kirchnerista en el Senado, había sido crítico con la expresidenta, pero también el garante de los fueros que mantienen libre a Cristina ante las numerosas causas judiciales que enfrenta. Es el antiperonismo con un peronista en el binomio. Otra fórmula antigrieta, pero en este caso con escaso arrastre territorial.

Este 11 de agosto se celebran las llamadas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (denominadas PASO), las elecciones que definen qué partidos podrán presentarse a las elecciones generales del 27 de octubre. De acuerdo con los resultados de esa gran encuesta obligatoria (ningún partido grande se presenta a las internas presidenciales, porque llevarán un solo candidato), el gobierno verá cuál es la energía con la que llega a las elecciones generales. Las cartas del macrismo están puestas en los dos distritos que conduce y se pondrán en juego con las elecciones nacionales: la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juntas componen casi la mitad del padrón electoral.

Desde sus inicios el gobierno ha prometido que “el próximo semestre” mejorarán las cosas. En 2017 las cosas progresaron un poco y el partido oficial arrasó en las elecciones legislativas. El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne renovó la versión de “el próximo semestre” por un “lo peor ya pasó”.

Y puede que así sea, aunque nada pareciera indicarlo, ni nadie creerlo. Por ahora.



Para evitar que sus hijos estuvieran deambulando por las calles y terminaran en situaciones peligrosas, Sandra “la Picu” Cuello se encargó de que practicasen

fútbol, y que sus hijos y muchos de los hijos de sus vecinos fueran aceptados en algunos clubes de las ligas infantiles. Al estar tantas horas afuera con los chicos, estos pasaban hambre; entonces comenzó a organizarles meriendas. Al poco tiempo Sandra, que en ese momento tenía siete hijos y ahora tiene nueve, estaba dando de merendar a entre veinte y treinta niños del barrio Yapeyú, en la ciudad de Córdoba. Cuando asomaba la crisis de 2001 logró, junto a otras madres, que el gobierno provincial construyera un comedor en el barrio. Sandra comprendió que la dificultad de darles de comer a sus hijos no era tan distinta a la de compartir los alimentos con otros niños y ancianos en su vecindad, o en toda la manzana, donde estaban pasando por las mismas o peores carencias. Organización de por medio, se convirtió en un referente social de su barrio y en dirigente local de la organización Barrios de Pie, presente en los barrios populares de la ciudad y parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular a nivel nacional.

–Los medios dividieron a la sociedad. Se creó esta imagen que vendieron en televisión con programas como *El puntero*, que pinta a los dirigentes barriales como corruptos, como vagos con planes sociales. El justicialismo también fue un gran culpable de esa dinámica. La situación en los barrios es tan o más grave que en 2001. Pero acá arrasó Macri en las elecciones. Esto estaba pintado de amarillo. ¿Cómo se entiende? Porque nos dividieron. Y porque con el kirchnerismo la realidad no cambió mucho para nosotros, las carencias son las mismas desde hace veinte años.

En los comedores de Barrios de Pie llevan un registro del estado nutricional de los niños. Solo un 17% de ellos está bien; los demás niños están en estado de malnutrición u obesidad, debido a la mala calidad y pobre variedad de nutrientes con que los niños se alimentan. Esto es grave porque afecta el desarrollo cognitivo y físico de los pequeños.

Según datos recientes, el 50% de los niños en Argentina vive bajo la línea de pobreza. Unos 3,4 millones de argentinos no pueden asegurarse dos comidas diarias; eso en un país que produce comida para 440 millones de personas, diez veces el número de sus habitantes, de acuerdo con un reporte de la BBC.

–Los comedores y merenderos no están pudiendo con el aumento de la demanda. Las necesidades se están sintiendo más y eso obliga a organizarse. Nosotros estamos más acostumbrados a esto. Hay que ver qué pasa con la clase media, cuando empieza a tomar conciencia. ¿Qué hacen ellos? –

IGNACIO CONESE es fotógrafo y cronista. Ha publicado reportajes, crónicas y entrevistas en *Vice*, *TRT World* y la revista *Brando*, entre otros medios. Reside en las sierras de Córdoba, Argentina.